

C.A. de Santiago

Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

A folio 37, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Daniel Alexander Matus de la Parra Sandoval, ingeniero, por sí, y deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en descontar por planilla en sus remuneraciones y sin su consentimiento, cuotas correspondiente a un crédito social que, a su parecer, estaría prescrito, lo que vulneraría su garantía constitucional contemplada en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, su derecho de propiedad, por lo que pide a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida dejar sin efecto los descuentos sobre sus remuneraciones respecto del crédito social, se le restituyan los montos descontados en razón de lo anterior en el mes de noviembre de 2021, con costas.

En cuanto a los hechos señala, en síntesis, que durante el 19 de julio del año 2018 suscribió un pagaré N°098CON101140087 con la recurrida por medio del que solicitó un “crédito social”, pagadero en 60 cuotas, por la suma de \$ 5.729.946, con vencimiento los días 30 de cada mes, menos febrero, con una cuota mensual de \$ 164.043. Sin embargo, por diversas razones se vio en la imposibilidad de pagar y cayó en mora, al haber pagado hasta la cuota que vencía el 30 de abril de 2019, razón por la que Caja de Compensación Los Andes lo demandó el 25 de noviembre del mismo año, ante el 15° Juzgado Civil, causa Rol C-33017-2019,



fundándose en el mismo pagaré antes aludido, por una deuda de más de \$5.000.000, que contempla capital e intereses, habiéndose hecho exigible el total de la deuda. Añade que en dicha causa opuso excepción de prescripción de la acción ejecutiva, en virtud del artículo 464 N° 17 del Código de Procedimiento Civil.

Afirma que el recurrente que, sin perjuicio de lo anterior y el tiempo transcurrido, al revisar su liquidación de sueldo correspondiente al mes de noviembre de 2021, se percató de la realización de un descuento en favor de Caja de Compensación Los Andes por la suma de \$ 165.768.

Estima que la recurrida, actuando dentro de las facultades que tiene para obtener el pago de las cuotas adeudadas, ha excedido sus atribuciones con el descuento realizado, cometiendo un acto arbitrario e ilegal, al haber accionado ejecutivamente y hacer exigible el total de la deuda en una causa en que opuso excepción de prescripción, por lo que al realizar estos descuentos la Caja de Compensación estaría abusando de las facultades que le otorga la ley, vulnerando con ello su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

Por lo que pide en consecuencia se acoja el presente recurso, en los términos antes referidos.

SEGUNDO: Que informando la recurrida Caja de Compensación Los Andes pide el rechazo del presente recurso.

En primer término, indica que con fecha 19 de julio de 2018, se otorgó a la recurrente un crédito por \$ 5.276.946, pagadero en un plazo de 60 meses, en cuotas mensuales de \$ 164.043, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de octubre de 2018. Precisa que las cuotas N° 1 a 37 fueron pagadas entre el 10 de noviembre



de 2018 y el 10 de enero de 2022, y que a la fecha están en mora las cuotas correspondientes a noviembre y diciembre de 2021, es decir las N°s 38 y 39.

Sostiene que no existe una actuación ilegal o arbitraria de su parte, toda vez que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Por lo demás, afirma que no se trata de una deuda cuya acción de cobro haya sido declarada prescrita judicialmente, y que se trata de una deuda que se encuentra plenamente vigente, es actualmente exigible, y que la prescripción debe ser declarada judicialmente, y que en el caso de autos se trataría de un mutuo que mantiene morosidad de las cuotas con vencimiento a partir de noviembre de 2021, por lo que no ha transcurrido el plazo de cinco años para alegar la prescripción de la deuda.

TERCERO: Que, previo a la vista de la causa de dispuso como trámite se acompañaran los antecedentes respectivos de la causa tramitada en sede civil, en la que se daría cuenta de lo planteado por el recurrente de haberse ejercido la acción ejecutiva por parte de la Caja de Compensación Los Andes. Que cumplido lo pedido, se constata que con fecha 18 de febrero de 2022 se dictó sentencia definitiva por la que se acogió la excepción de prescripción planteada por el ejecutado, recurrente en estos autos, en la causa Rol C-33107-2019, seguida en el 15° Juzgado Civil de Santiago, encontrándose la misma ejecutoriada.

CUARTO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una



acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que atendido el mérito de los antecedentes y la materia de que se trata, no existe discusión respecto de la normativa del artículo 1, 19 N° 3, 22 y 30 de la Ley N° 18.833, que “Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)”, que rija a la recurrida en lo pertinente, pudiendo perseguir el cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social que administra, dirigiéndose en la forma que todo acreedor debe y puede hacerlo para obtener el cobro de sus acreencias.

SEPTIMO: Que, así, lo que en la especie se reprocha es el carácter arbitrario del actuar de la recurrida, entendido este como carente de justificación, caprichoso, y sobre todo el uso imprevisto o inadvertido que ha hecho de una prerrogativa legal, como la contenida en el artículo 22 de la ley señalada desde que, en el contexto en mora en el pago de la deuda contraída por el recurrente a raíz de un crédito social, garantizado mediante un

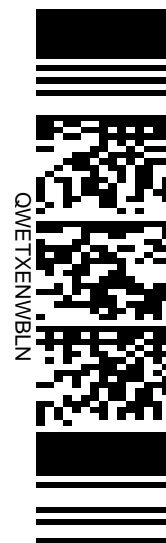


pagaré, la Caja de Compensación Los Andes demandó ejecutivamente para obtener su pago, dictándose sentencia el 18 de febrero de 2022, por el Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago en los autos Rol C-33107-2019, acogiéndose la excepción de prescripción de la acción ejecutiva opuesta por la recurrente, ejecutada en dicha causa.

OCTAVO: Que, así, sin desconocer o su derecho al pago del crédito que tiene la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes -recurrida-, cuya discusión excedería, por cierto, los márgenes de esta acción cautelar, como la misma recurrida recuerda en su informe, aparece que con la decisión que tomó de hacerse pago por la vía ejecutiva, aceptó la eventualidad de no obtener sentencia favorable, como en la especie ocurrió, al haberse declarado prescrita la acción ejecutiva, por lo tanto insistir en realizar descuentos para el pago de la misma deuda, sin autorización del trabajador en sus remuneraciones, devino en un acto antojadizo, que revela el ejercicio de una potestad autotutelar que no tiene ni le ha sido otorgada en las condiciones que se han señalado, y por lo mismo constitutivo de un acto arbitrario, lo que así será declarado, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

NOVENO: Que establecido que ha sido la existencia de un acto arbitrario imputable a la recurrida, corresponde determinar si de ese acto se ha seguido directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra la garantía constitucional invocada y protegible por la presente acción.

DECIMO: Que la constatación de este presupuesto del recurso también resulta evidente y se confirma con el propio



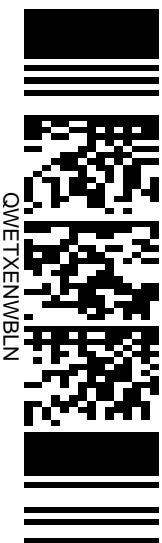
razonamiento que hace la recurrida en su informe y su presentación posterior respecto de la causa tramitada en sede civil.

UNDECIMO: Que, de este modo, este actuar ilegal trajo consigo la vulneración de la garantía que le aseguraba al recurrente la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24 de verse privada del dominio de bienes de su propiedad, afectación que se produjo en los hechos con el comportamiento de la recurrida de descontar dineros de sus remuneraciones, motivos bastantes para que el recurso de autos sea acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, **se acoge** el recurso deducido por don Daniel Alexander Matus de la Parra Sandoval en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, debiendo la recurrida abstenerse de seguir descontando de las remuneraciones del recurrente las sumas correspondientes al crédito social individualizado, y además hacer restitución de las sumas que por esa razón haya descontado, dentro de quinto día ejecutoriada que sea la sentencia, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

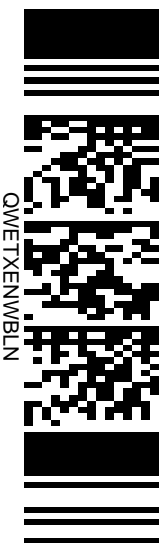
N°Protección-41417-2021.

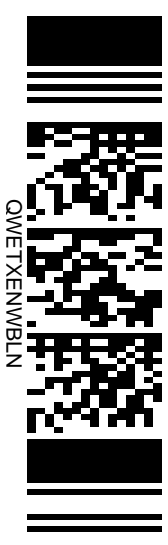


Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gómez Quiral, señor Tomás Gray Gariazzo y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta lltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





QWETXENWBLN

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Tomas Gray G. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

